

AGRICULTURA, AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

José Antonio Segrelles Serrano¹

*Y a esto llaman Cinturón Verde, pensó, a esta desolación, a esta especie de campamento soturno, a esta manada de bloques de hielo sucio que derriten en sudor a los que trabajan dentro, para mucha gente estos invernaderos son máquinas, máquinas de hacer vegetales, realmente no tiene ninguna dificultad, es como seguir una receta, se mezclan los ingredientes adecuados, se regula el termostato y el higrómetro, se aprieta un botón y poco después sale una lechuga (José Saramago, en *La caverna*. Madrid: Alfaguara, 2000, pp. 326-327)*

INTRODUCCIÓN

Se puede decir que de forma tradicional los conceptos de *agricultura* y *ambiente* han encerrado significados abiertamente antagónicos porque respondían a intereses contrapuestos, toda vez que no podía haber conciliación posible entre el desarrollo agrario y la protección del medio. Al mismo tiempo, se establecía un dilema entre la necesidad de alimentar a una población creciente con alimentos nutritivos e inocuos y la degradación de los recursos naturales y del ambiente que conlleva la excesiva intensificación de las producciones.

En el caso de la Unión Europea (UE), el factor principal de discordancia entre la actividad agropecuaria y el respeto ambiental ha sido hasta hace poco tiempo la Política Agrícola Común (PAC), cuyas estrategias se encaminaban sin titubeos hacia los rendimientos elevados y la máxima productividad mediante la implementación de un paquete tecnológico intensivo: mecanización, fertilización química, uso generalizado de pesticidas, empleo de semillas seleccionadas, expansión del cultivo protegido, difusión del regadío.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esta agricultura intensiva, protegida y subvencionada se convirtió en un aprovechamiento generador de excedentes crónicos, hecho que unido a los insostenibles gastos presupuestarios que su aplicación comportaba y a las crecientes críticas de este modelo por parte de muchos países agroexportadores y de los organismos comerciales internacionales (como el GATT y después la OMC), condujo a que la UE hiciera de la necesidad virtud y trocara el tradicional discurso “agrarista” en otro de corte global donde los espacios rurales se

¹ Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, director del Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) y coordinador del seminario *A vueltas con la agricultura. Una actividad económica necesaria y marginada*.

consideran como un todo integral en el que se pone de relieve una nueva dimensión ambiental, cultural y paisajística del campo.

La reforma de la PAC (1992), la Declaración de Cork (1996), la denominada Agenda 2000 (1997) y la última reforma de 2003 han sido los instrumentos de los que se ha ido dotando la UE para acometer una transformación agrorural sin precedentes, donde el predominante modelo de productividad a ultranza va dejando paso progresivamente a un nuevo paradigma que se fundamenta en los conceptos de multifuncionalidad y pluriactividad de la agricultura y los campesinos. Conviene destacar que el concepto de multifuncionalidad se utiliza por vez primera en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en 1992 (Cumbre de Río). A partir de este momento se realizan varios estudios y aproximaciones teóricas a dicho concepto, al mismo tiempo que su uso es cada vez más frecuente en los foros internacionales, como sucede en los casos de la celebración del quincuagésimo aniversario de la creación de la FAO (Declaración de Québec, 1995) y de la Declaración de Ministros de la OCDE en 1998.

Por su parte, la UE asume enseguida el fondo y la forma del concepto de multifuncionalidad rural como bandera de las sucesivas reformas que han jalonado el devenir de la PAC durante los últimos lustros. Incluso, con toda seguridad, la multifuncionalidad del campo, junto con el desarrollo sostenible y la conservación ambiental como telones de fondo, será una cuestión nuclear y emblemática cuando se aborde la revisión definitiva de las políticas agrícolas y rurales comunitarias en 2013.

Las declaraciones oficiales mantienen que con este nuevo enfoque multifuncional de la agricultura se pretende combinar la función productora de alimentos con otras actividades que garanticen el mantenimiento del tejido social, la conservación del medio natural y la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la población rural. Por consiguiente, también el medio rural asumiría la doble función de producción de bienes tangibles para el mercado y de bienes públicos o servicios inmateriales ligados al bienestar de los ciudadanos y al respeto ambiental.

Este capítulo se ha estructurado en torno a tres apartados fundamentales. En el primero de ellos se plantean las estrategias ambientales de las políticas agrarias y rurales de la UE con el fin de demostrar que el discurso oficial de tipo ambiental y rural que predomina en la actualidad es más una coartada para tranquilizar a los organismos comerciales internacionales, a la sociedad y a los países agroexportadores que un verdadero compromiso con la integridad del medio y el respeto a los recursos naturales y ecosistemas europeos.

En el segundo apartado se plasman las principales características ambientales de la actividad agropecuaria en España, así como los sistemas agrarios que singularizan al campo español y lo distinguen de los demás países de la UE. Se hace especial mención a las dehesas, al barbecho en rotación en el cereal de secano y al cultivo en terrazas o bancales.

El tercer y último epígrafe se dedica al estudio del desarrollo sostenible en la agricultura como garantía del respeto ambiental, pero sin olvidar las contradicciones que existen entre ambos conceptos y lo difícil que resulta lograr la tan demandada y deseada

sostenibilidad bajo un modo de producción cuyo norte siempre ha sido la búsqueda del mayor beneficio en el menor tiempo posible.

1.LAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES DE LAS POLÍTICAS AGRORRURALES EUROPEAS

Como ya se ha mencionado arriba, la generación crónica de excedentes y los enormes gastos presupuestarios de la política agrícola constituyen los principales factores que despiertan la conciencia ambiental, ecológica y rural de Bruselas. Los gastos de la sección Garantía del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrarias) representaban en 1996 el 50,5 % del desembolso total de la UE, mientras que en 2001 y 2005 suponían, respectivamente, el 48,1 % (Romero, 2002) y el 43,0 % (Diario *El País*, Madrid, 21 de marzo de 2005). Este porcentaje era del 64,2 % en 1988 (Vieri, 1994), es decir, dos años después del ingreso de España en las Comunidades Europeas.

En este contexto, la reforma de la PAC y la Agenda 2000 aparecen como un intento claro de adaptación al nuevo impulso del neoliberalismo mercantil mediante la reducción de las producciones (política de cuotas) y de los precios subsidiados (política de ayudas directas a las rentas de los agricultores y no a la producción). Para ello es imprescindible potenciar las prácticas agropecuarias extensivas y no contaminantes, la reforestación de antiguas tierras agrícolas, las jubilaciones anticipadas de los campesinos, las ayudas para abandonar la actividad agraria, el mantenimiento de la población y el empleo en las áreas rurales, el apoyo a las zonas desfavorecidas y de montaña y la revalorización de los espacios y recursos naturales. Por eso no se puede entender la relación que actualmente existe entre la agricultura y el ambiente y lo que en realidad significa el desarrollo sostenible sin analizar antes el trasfondo de las políticas y estrategias agrarias y rurales de la UE.

Las iniciativas “ambientales” comunitarias han afectado sobremanera a los países del sur de Europa, sobre todo a España, pues estas medidas representan de hecho un contundente golpe para una actividad agraria de tipo familiar que a duras penas puede sobrevivir debido a sus graves problemas de rentabilidad. Las nuevas políticas europeas favorecen a las explotaciones de mayores dimensiones y a las agriculturas continentales (cereales, lácteos y carne de vacuno) frente a las explotaciones pequeñas y a las agriculturas mediterráneas (aceite de oliva, vino, frutas, hortalizas, tabaco, algodón), respectivamente.

La Agenda 2000, por ejemplo, sólo hace una breve alusión a los cultivos mediterráneos, mientras que, por el contrario, se extiende y es más minuciosa con las producciones continentales. Asimismo, este documento, donde se realizaba un planteamiento económico-financiero sobre el futuro de la UE para el periodo 2000-2006, no disponía medidas para lograr una mayor racionalidad de las explotaciones y seguía sin apostar por una decidida mejora estructural ni por una política fiscal para movilizar la tierra, al mismo tiempo que olvidaba incentivar la transformación de los productos alimentarios e incluso potenciar la comercialización de los mismos. Sin embargo, concedía recursos presupuestarios abundantes y un papel de primer orden a los instrumentos agroambientales con el fin de fomentar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la creciente demanda de servicios ambientales por parte de la sociedad.

En definitiva, estas divergencias agrarias entre el norte y el sur de la UE se acentúan además por la escasa importancia otorgada a las políticas estructurales, pues éstas deberían haber sido más eficaces para ayudar al equilibrio de la agricultura mediterránea, caracterizada en términos generales por el acusado minifundismo y la baja productividad. Ya en 1991 J. Cruz afirmaba que los bajos presupuestos del FEOGA-Orientación, en comparación con los del FEOGA-Garantía, y las diversas y poco eficaces políticas agrarias nunca habían perseguido en realidad la corrección de los desequilibrios territoriales, las diferencias sociales o la reducción efectiva de las producciones en todo el ámbito comunitario y sin excepciones (García Delgado y García Grande, 2005).

Cabe preguntarse entonces qué es lo que en realidad se pretendía con las nuevas políticas agrarias y rurales. La Agenda 2000, inspirada por los contribuyentes netos de la UE (Alemania, Austria, Holanda y Suecia), abogaba por la reducción del gasto agrícola. Este ahorro de las arcas comunes no servía para lograr un mayor apuntalamiento de la cohesión europea en otros capítulos socioeconómicos o políticos, sino que revertía en los respectivos Tesoros nacionales de cada país. De este modo no resulta exagerado afirmar que desde ese momento la mejora de los países ricos iba a estar financiada por los menos prósperos de la UE mediante la reducción de sus ayudas agrícolas y la presentación de la necesaria multifuncionalidad de los espacios rurales y la revalorización ambiental de los mismos como mascarón de proa de las nuevas políticas agrorurales.

De la misma manera que había sucedido con la reforma de la PAC de 1992, la nueva reforma de 2003 se ha producido en los años inmediatamente previos al final de la ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta coincidencia se dejaba también entrever en las medidas concretas propuestas y, sobre todo, en las realmente aprobadas en junio de 2003. A las fuertes presiones de la OMC se unía una situación interna marcada por la ampliación de la UE a 25 países. Esto supuso la congelación del presupuesto comunitario orientado a los mercados agrarios con referencia al año 2006 y para el periodo 2007-2013, presupuesto que tendrá que repartirse entre 25 países y no entre 15 como hasta este momento.

A esta situación no es ajeno el hecho de que la agricultura de las dos superpotencias comerciales (Estados Unidos y la UE) sólo supone el 2 % de sus respectivos PIB, mientras que el 75 % de los mismos está representado por los servicios. El resto (23 %) corresponde a los productos industriales, entre los que se encuentran los bienes agroalimentarios. Los imperativos de crecimiento económico y empleo conduce a ambas potencias a una estrategia clara: aumentar las exportaciones de servicios y productos industriales aunque ello suponga importar más productos alimenticios. Se puede decir que en términos generales este ha sido el principal objetivo de las sucesivas reformas de la PAC desde 1992, de las modificaciones de la Ley Agrícola de Estados Unidos (Farm Bill) desde 1996 y del acuerdo sobre agricultura acordado en el seno de la OMC y que se inicia a partir de 1995. Este objetivo es prioritario y ha seguido en vigor en todas las reuniones de la llamada Ronda del Desarrollo o Ronda Doha (Doha, 2001; Cancún, 2003; Hong Kong, 2005), incluso en la reunión previa celebrada en Seattle en 1999.

Para que los agricultores aceptaran estas reformas fue necesario compensar la caída de los precios agrícolas con subsidios que no distorsionasen los intercambios comerciales y que estuvieran separados de los precios o de la producción del año en curso, según lo exigido por la OMC. Por supuesto, el beneficio que esto tendría para el ambiente, el paisaje, la calidad de los alimentos y el bienestar animal no es más que una coartada, tanto para los propios contribuyentes de los países ricos como para los países subdesarrollados que claman desde hace tiempo por el fin de las subvenciones agrarias en la UE y Estados Unidos.

La OMC clasifica los diferentes tipos de subsidios agrarios en tres categorías: las denominadas caja naranja, caja azul y caja verde. La caja naranja hace alusión a las ayudas que deben evitarse o reducirse al máximo e incluye aquellos apoyos económicos vinculados a la producción agropecuaria o a los precios del año en vigor y que la OMC considera que tienen una influencia decisiva en el comercio internacional.

Por su parte, las ayudas incluidas en la caja azul están toleradas porque comprenden los subsidios ligados a una producción, aunque el apoyo recibido no debe ser equivalente en ningún momento a la cantidad producida. En el caso de la actividad ganadera, esta categoría de ayudas no están vinculadas a los precios, sino a una superficie y un rendimiento fijos y establecidos de antemano.

La caja verde, que es la que más interesa en la cuestión tratada aquí, aglutina las ayudas que no tienen limitaciones porque no influyen en los precios de los productos ni en la producción agraria del año en curso. Aquí es donde precisamente entran las subvenciones relacionadas con la protección ambiental, aunque también se vinculan a los servicios públicos relacionados con la formación y la investigación y a los fondos destinados a paliar los efectos de cualquier desastre o plaga naturales.

Al hilo de estas exigencias de la OMC, la nueva PAC, aprobada, como se ha indicado arriba, por el Consejo de Ministros de la UE en el mes de junio de 2003, se articula en torno a tres instrumentos básicos: el desacoplamiento de las ayudas, la modulación obligatoria de las mismas y la ecocondicionalidad de los subsidios. De una forma u otra y con mayor o menor intensidad, estos tres instrumentos suelen utilizar argumentos ambientales y de sostenibilidad para que sean aceptados por la opinión pública europea, aunque dichos argumentos no sean siempre verdaderos.

En cuanto a la modulación de las ayudas, la PAC renovada no ha asumido las reivindicaciones tradicionales de los agricultores que se encaminaban hacia la protección de las explotaciones agrarias familiares, al mismo tiempo que clamaban para que se dejara de apoyar a los grandes propietarios, que disponen de grandes extensiones de tierra de la que obtienen una producción elevada, pero que no viven del campo ni en el medio rural. Esta modulación de la nueva PAC consiste en desviar los recursos desde los subsidios directos hacia las estrategias de desarrollo rural y protección ambiental, lo que genera una gran desigualdad entre los diferentes países de la UE desde el momento en que se exige que estas medidas ambientales y de desarrollo rural estén cofinanciadas por los Estados miembros. Este desequilibrio territorial se acentúa debido a la decisión de que el dinero que no se aplica en las subvenciones a la producción debe permanecer en el país que lo genera. Es evidente entonces el menoscabo que sufren las políticas de cohesión territorial y lo difícil que resulta en estas condiciones conseguir el tan ensalzado desarrollo sostenible de la agricultura y los espacios rurales.

El desacoplamiento de las ayudas agrarias, por su parte, consiste en disociar los apoyos económicos de la mera producción con el objeto de que las explotaciones reciban un pago único por unidad de producción o por hectárea sobre la base de las ayudas cobradas entre los años 2000 y 2002. De este modo se consolidan las fortísimas desigualdades que propició la PAC desde sus inicios y que siempre han existido en la distribución de los subsidios a favor de las grandes propiedades. En este contexto, las pequeñas y medianas explotaciones sufren las consecuencias de una competencia desleal y se ven impelidas, debido al escaso apoyo de los poderes públicos, hacia un aumento de la productividad para poder sobrevivir. No hace falta insistir en que la consecuencia directa de estas estrategias es la renovada presión que se ejerce sobre el ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales europeos, es decir, justo lo contrario de lo que legisla la normativa comunitaria y de lo que dicen buscar los discursos oficiales.

Además, este instrumento que separa la ayuda económica de la producción, pero que realiza pagos conforme al mencionado periodo de referencia 2000-2002, refuerza el papel preponderante de los principales y más potentes agentes de los sectores agropecuario y agroalimentario: los grandes propietarios, la agroindustria y la gran distribución organizada.

A este respecto hay que tener en cuenta que los pequeños y medianos agricultores no pueden suministrar los productos requeridos ni soportar los pagos aplazados y que, por lo tanto, a la gran distribución no le interesa trabajar con las explotaciones familiares porque lo que le conviene es tener relaciones con las potentes, intensivas y capitalizadas empresas de corte agroindustrial, capaces de suministrar grandes cantidades de productos estandarizados en el menor tiempo posible y a un precio mínimo. Estos agricultores familiares son rechazados de plano por la gran distribución agroalimentaria porque su forma de producir, sus características productivas y los productos obtenidos se alejan del modelo agroindustrial que les permite controlar la cadena de la alimentación y obtener sustanciosas ganancias (Montagut y Dogliotti, 2006; Montagut y Vivas, 2007). Aunque se tratara de una producción sostenible, respetuosa con el entorno y vital para las comunidades rurales, a la gran distribución no le interesaría nunca una actividad que proporciona cantidades pequeñas de productos variados, que se desarrolla en una gran diversidad de sistemas agropecuarios, que respeta los ciclos biológicos, que demanda precios reales y remuneradores, que no requiere grandes inversiones ni necesita endeudarse y que se integra con los ecosistemas de forma estrecha (Vorley, 2003).

En definitiva, la agricultura social y familiar, de características sostenibles, respetuosa con el ambiente, de calidad nutritiva y generadora de empleo y vida en los pueblos, necesita un modelo de comercialización que no sea el de la gran distribución organizada, sino más bien el de los mercados cercanos y circuitos mercantiles cortos, es decir, el del consumidor como persona con rostro, con criterio y capacidad de elección (Xarxa Consum Solidari, 2007).

El instrumento de la nueva PAC conocido como ecocondicionalidad agraria se acomoda perfectamente a las exigencias de la OMC porque en ningún momento las ayudas que se conceden bajo este concepto distorsionan los mercados. Aquí se incluyen los subsidios destinados a los programas de formación e investigación y a la

construcción de infraestructuras rurales, así como los pagos directos a los agricultores que no incentiven la producción, como es el caso de los que se orientan a la reestructuración de las explotaciones, a los programas de desarrollo regional, al fomento de la multifuncionalidad rural y pluriactividad campesina (Atance y Tió, 2000) y a la preservación de los ecosistemas y búsqueda de la calidad ambiental (Segrelles, 2001). Sin embargo, la realidad diaria demuestra que esta estrategia no es más que una excusa urdida para seguir subvencionando las agriculturas más competitivas y a las explotaciones de grandes dimensiones, aunque bajo una máscara “sostenible” que no moleste demasiado no sólo al competidor directo (Estados Unidos) y a la OMC, sino también a los países pobres agroexportadores que ven en todo ello una clara competencia desleal (Segrelles, 2004). En este contexto es más que probable que esta ecocondicionalidad represente de hecho un obstáculo para la entrada de los productos agroalimentarios de los países subdesarrollados al mercado europeo y no tanto la garantía de unos beneficios sociales y ambientales para el campo de la UE.

En cualquier caso, pese al recorte presupuestario y al predominio de los discursos oficiales de tipo ambiental, sostenible y multifuncional, la PAC sigue defendiendo un modelo agrario de elevada productividad para mantener la eficacia económica de su agricultura y la competitividad en los mercados mundiales. Al mismo tiempo, la PAC también continúa manteniendo un alto grado de protección agropecuaria, aunque si bien es cierto que bajo una nueva retórica de sostenibilidad, multifuncionalidad y pluriactividad campesina. Resulta evidente que estos nuevos conceptos sobre los que gira la agricultura europea, concretados en las sucesivas reformas de la PAC, sirven de hecho para legitimar, mediante fundamentos aceptables para la sociedad y para la OMC, la permanencia de una política agraria renovada (Izam y Onffroy, 2000).

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

Antes de abordar las principales características ambientales de la agricultura española es conveniente indicar que esta actividad económica se basa en la utilización de los recursos naturales, como es el caso del agua, el suelo y el aire, al mismo tiempo que influye de manera decisiva en la organización y morfología de los espacios y modela los paisajes rurales durante su evolución histórica. En este poder de modelación de los paisajes rurales es donde se une e interrelaciona lo físico con lo humano, de forma que la agricultura, en general, y los diferentes sistemas agrarios, en particular, son invenciones humanas que en la actualidad constituyen un valioso patrimonio cultural e histórico que merece ser protegido y alentado.

También se debe tener en cuenta que la agricultura presenta formas diferentes que dependen de las características climáticas, la disponibilidad de agua y la configuración física del lugar donde se desarrolla. De ahí la gran variedad de sistemas agrarios que existen en el mundo e incluso entre las distintas regiones de un mismo país. España exhibe una elevada diversidad agropecuaria sin parangón entre los restantes miembros de la UE. Buena muestra de esta aseveración la constituyen los bosques y praderas de la cornisa cantábrica y los Pirineos, los olivares de la mitad meridional, las huertas y naranjales en los sectores oriental y sureste, los cereales y cultivos industriales mesetarios con explotación extensiva, las dehesas occidentales o los paisajes de terrazas de Canarias, la zona levantina y otros lugares del país.

Es fácil deducir, en consecuencia, que existe una profunda interdependencia entre la agricultura y el ambiente. Estas relaciones son complejas porque dependen de factores locales: el clima, la configuración del terreno, las características agrológicas, las condiciones económicas y técnicas que predominan en la producción o el tipo de prácticas agrarias. Sin embargo, como indica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2003), el impacto ambiental de la actividad agropecuaria no tiene por qué ser sólo negativo, puesto que puede resultar tanto perjudicial como benéfico y en muchas ocasiones se producen ambas situaciones de forma simultánea. Es decir, los efectos dañinos de la agricultura sobre el ambiente provienen de las prácticas inadecuadas, pero en ocasiones, no siempre, aquellos desaparecen cuando éstas se modifican y mejoran.

El desarrollo de las técnicas intensivas de producción agrícola implica la utilización generalizada de fertilizantes químicos que acaban por contaminar los suelos y las aguas cuando su uso es excesivo. Los residuos generados por esta fertilización artificial de la tierra no sólo perjudican a la microflora y microfauna del terreno y a otras especies vegetales y animales, sino que tienen consecuencias nefastas para la propia estructura edáfica debido a los cada vez más acusados procesos de erosión y desestructuración que se producen. Los bajos niveles de abonado orgánico, la creciente salinidad del terreno por la acumulación de sales minerales, la escasa cobertura vegetal, la acción de los vientos y las lluvias y el excesivo laboreo o a favor de pendiente son factores que se combinan para alcanzar un resultado gravísimo: el aumento de la desertización, hecho que afecta sobremanera a la España mediterránea.

El desmonte y la conversión de terrenos forestales en superficies agropecuarias, actividades que fueron muy frecuentes en otras épocas no demasiado lejanas, llevan consigo la destrucción de multitud de recursos directos (leña, madera) e indirectos (modificaciones en los microclimas de ciertas zonas, mayor irradiación, menor infiltración hídrica, mayor escorrentía, mayor erosión, menor valor paisajístico, ambiental y cultural).

La ganadería, por su parte, también ejerce una influencia decisiva en el ambiente, sobre todo desde que los aprovechamientos tradicionales ceden terreno a los sistemas de producción industrializados, donde los animales ya no dependen del factor tierra ni de los recursos naturales para su cría y desarrollo, sino de los piensos compuestos. La explotación pecuaria intensiva en España implica una traslación de las principales zonas ganaderas de oeste a este, pues se abandonan las áreas tradicionales y se produce una concentración espectacular de granjas avícolas y porcinas en el litoral mediterráneo y los alrededores de Madrid, es decir, en las áreas metropolitanas y cerca de los potenciales consumidores (Segrelles, 1993). En cualquier caso, se debe tener en cuenta que aumentan las cargas ganaderas por unidad de superficie, que la ganadería contribuye al efecto invernadero por la emisión de metano y amoníaco y que las deyecciones, sobre todo en el caso del ganado porcino (purines), constituyen un grave foco de contaminación ambiental cuando las explotaciones no disponen de tierra suficiente (Segrelles, 1991). De todos modos, en España todavía no se ha llegado al nivel preocupante de otros países europeos, como sucede por ejemplo en los Países Bajos (Segrelles, 1995).

España es el país de la UE que presenta una mayor biodiversidad y una acusada concentración de sistemas agropecuarios extensivos. Esta circunstancia contribuye a la existencia de importantes reservas ecológicas. Aquí se encuentra el 60 % de los hábitats y el 40 % de las especies de interés comunitario, al mismo tiempo que el 24 % de la superficie nacional (12 millones de hectáreas) se incluye en la Red Natura 2000, creada por la Directiva 92/43/CEE y apoyo básico de la UE para conservar la biodiversidad y la integridad de muchos ecosistemas.

Las condiciones climáticas y orográficas de España propician que las actividades agropecuarias generen impactos ambientales muy diferentes en número e intensidad a los que se producen en Europa central y septentrional. Dentro de los sistemas extensivos, más respetuosos con el medio y menos contaminantes, se pueden encontrar los cultivos herbáceos, los cultivos permanentes, los aprovechamientos mixtos de subsistencia, la ganadería sustentada por pastos naturales y seminaturales, entre otros. Sin embargo, los sistemas más representativos de la agricultura mediterránea y que le conceden una importantísima singularidad ambiental son el barbecho de los cereales de secano en rotación, las dehesas y los cultivos en terrazas o bancales, según consta en *El Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Sostenible* (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003).

El barbecho en rotación en el cereal de secano constituye un sistema agrario prácticamente inexistente en los países del centro y norte de Europa. En España existen 3,3 millones de hectáreas de barbecho tradicional, que afecta al 41 % de la superficie consagrada a los cultivos herbáceos. A la cifra total absoluta habría que sumar un millón más de hectáreas que han sido abandonadas por imperativo de las sucesivas reformas de la PAC, que ha financiado la retirada forzosa de grandes extensiones de tierras agrícolas. Asimismo, desde el punto de vista ambiental, se debe tener en cuenta que el cultivo extensivo de cereales asociado al barbecho representa un notable enriquecimiento de la biodiversidad animal y vegetal, pues muchas de estas masas de cultivos conforman sistemas pseudoesteparios que sirven de refugio y alimento a las últimas colonias europeas de ciertas especies de aves.

Aparte de estas consideraciones, las características rotaciones de la agricultura mediterránea española representan muchos beneficios ambientales porque con ellas mejora el rendimiento de los cultivos y suministran nitrógeno al suelo cuando se intercalan las leguminosas, pues de este modo se conserva la fertilidad edáfica y se rompe el ciclo de las plagas. Pese a todo, este sistema de rotaciones ha disminuido en todo el territorio español debido a la generalización del abonado químico y del uso de productos fitosanitarios a los que obliga el monocultivo, lo que supone un notable foco de contaminación ambiental y de degradación de los ecosistemas.

Las dehesas constituyen un aprovechamiento agrosilvopastoril típico de la península Ibérica, pues su máxima representación se encuentra en Portugal y España, dando lugar a ecosistemas únicos que ofrecen un elevado valor económico, cultural, social y ambiental. En este singular sistema de pastos arbolados se integran de forma armoniosa y equilibrada las producciones agrícola, ganadera y forestal, y todo ello con el máximo respeto ambiental y los máximos beneficios ecológicos, ya que el arbolado permite aprovechar la mayor parte de la radiación solar, minimiza la erosión, crea un microclima que amortigua las heladas del invierno y la excesiva insolación del verano y bombea nutrientes desde los horizontes edáficos más profundos. Las especies arbóreas

predominantes son el alcornoque y la encina, aunque también existen algunas áreas septentrionales que presentan dehesas en las que el protagonismo es del pino silvestre, el roble melojo o el castaño.

En el caso concreto de la actividad pecuaria en los sistemas adehesados hay que tener en cuenta que la explotación extensiva mantiene el equilibrio entre el suelo y la vegetación, aunque la ganadería con estas características es poco eficaz en la conversión energética. Sin embargo, el ganado extensivo es menos dependiente por lo que se refiere al precio de la energía, propicia unos gastos de explotación mínimos y utiliza subproductos de bajo coste (pastos naturales, paja de cereales, ramón de olivo y encina, tortas de girasol, frutos forestales, entre otros), circunstancia que posibilita a las unidades de producción soslayar la dependencia que suponen los piensos compuestos y la adquisición de la tecnología imprescindible para que funcione con rentabilidad la explotación industrializada de los animales.

Las ventajas ambientales de la ganadería extensiva en áreas de dehesa están fuera de toda duda, pues no sólo mejora la fertilidad del suelo por la incorporación de la materia orgánica que propicia el libre careo de los animales y se previenen los incendios forestales, sino que tal vez lo más importante sea la presencia de razas autóctonas, menos productivas, pero adaptadas secularmente a las condiciones climáticas y orográficas de la península Ibérica y garantes de la biodiversidad. De este modo se palia el grave despropósito que se produjo a partir de la década de los años sesenta del siglo XX al importar de forma masiva individuos foráneos muy productivos e introducir híbridos de elevado rendimiento, hecho que ha provocado en la ganadería española una degeneración racial sin precedentes (Segrelles, 1993). Por otro lado, el pastoreo extensivo permite la obtención de productos de calidad contrastada y alto valor añadido (jamones, carnes frescas, quesos, embutidos).

A este respecto, se debe tener en cuenta que la UE crea en 1992 varios sistemas o marcas de calidad con el objeto de promover y proteger múltiples productos agroalimentarios. Se trata de la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), que certifican que ciertos productos propios y singulares de ciertas regiones europeas han sido obtenidos o elaborados con métodos naturales y respetando el medio natural y el bienestar animal. Sin embargo, en numerosas ocasiones esta política parece más una estrategia para proteger los mercados europeos de la competencia de los países terceros que un verdadero compromiso con la integridad ambiental y las producciones agropecuarias sostenibles (Segrelles, 2007).

Otra característica singular de la agricultura española con implicaciones ambientales es el cultivo en terrazas o bancales, cuyo origen data de la época morisca. Este tipo de agricultura constituye una forma combinada de evitar la erosión y de aprovechar la fertilidad del suelo, ya que éste queda retenido con muros de piedra. Su valor cultural y paisajístico es notable, aunque en ocasiones presenta graves problemas erosivos y de deslizamientos de tierras cuando las terrazas se abandonan. Aunque se dice que la motivación de cultivar en bancales reside en la escasez de tierras agrícolas, lo cierto es que resulta mucho más importante el deseo de aprovechar ciertos microclimas adecuados para el desarrollo de cultivos de precio elevado y muy competitivos en los mercados. Se trata del almendro (Levante), el plátano (Canarias), el

níspero (Alicante), el cerezo (Valle del Jerte) o de la chirimoya y el aguacate (costa granadina).

Por último, en cuanto al valor ambiental de ciertos sistemas de cultivo existentes en España no se puede obviar el papel que representa el olivar en la alimentación de ciertas colonias de aves y en la importante función fotosintética que ejerce durante todo el año al tratarse de una especie de hoja perenne. Tampoco se pueden menospreciar los regadíos tradicionales, ya que mantienen ecosistemas seminaturales que alimentan y cobijan a varias especies de aves e insectos. Y eso sin dejar de mencionar el valor cultural y antropológico de los regadíos y las infraestructuras que lo hacen posible. Especial mención requieren los arrozales del delta del Ebro, la Albufera de Valencia, el Bajo Guadalquivir o las vegas alta y baja del río Segura. De todos modos, algunas de estas agriculturas presentan un nada desdeñable riesgo de contaminación ambiental (aire, suelos, aguas subterráneas y superficiales, pérdida de biodiversidad, alteración del paisaje) como consecuencia de la explotación intensiva y el excesivo empleo de fertilizantes químicos y productos fitosanitarios.

3. AGRICULTURA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Según *El Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Sostenible* (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003), el reto más importante que tiene ante sí el desarrollo rural en la actualidad y en el futuro inmediato es la alimentación de forma sostenible de la población mundial. Para comprender la auténtica dimensión de este problema hay que tener en cuenta, por un lado, que ciertas estimaciones auguran que la población mundial alcanzará 8.000 millones de individuos hacia el año 2020, y por otro que la agricultura debe afrontar este reto aumentando la producción de las tierras ya en uso, pero manteniendo su biodiversidad y evitando una mayor ocupación y roturación de los suelos frágiles, de elevado valor ambiental y productividad marginal. La solución a este dilema la aporta la misma publicación citada arriba cuando afirma que la conciliación entre el necesario crecimiento de las producciones agrarias para alimentar a esta población en aumento y la exigencia de preservar el ambiente y los recursos naturales es hoy en día posible mediante un desarrollo sostenible.

A este respecto se debe recordar que el célebre Informe Brundtland (*Nuestro futuro común*, 1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, define el desarrollo sostenible como “aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades”. Esta definición fue asumida poco después por la no menos famosa Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992.

La búsqueda oficial del desarrollo sostenible de la agricultura se contradice con ciertas voces poderosas que abogan por la difusión de los cultivos transgénicos como fórmula eficaz para poder alimentar a la creciente población mundial y acabar con el hambre. La expansión de estos organismos genéticamente modificados (OGM) constituye en la actualidad una de las cuestiones más controvertidas que afectan a la agricultura y a los espacios rurales de muchos países del mundo, aunque su generalización tiene, además, múltiples repercusiones territoriales, socioeconómicas,

geopolíticas, sanitarias, biológicas, éticas, culturales y ambientales (Segrelles, 2005). En efecto, la revolución biotecnológica remodelará la economía mundial, transformará nuestra sociedad y afectará al ambiente de la Tierra de tal modo que incluso existen autores que hablan ya de la asunción de un “segundo Génesis” (Rifkin, 1999). Otros, sin embargo, catalogan la expansión reciente de los OGM como una tercera *revolución verde* (Ferro et al, 2000). En cualquier caso, los recientes y acusados aumentos de los precios de los alimentos en la mayor parte de los países del mundo y la consiguiente amenaza del hambre que se cierne sobre millones de personas constituyen un excelente argumento para las empresas biogenéticas y para los partidarios de la generalización de los cultivos transgénicos.

Es verdad que la llamada *revolución verde*, que en su momento se vendió como la panacea que resolvería todos los problemas derivados del hambre en el mundo, consiguió que muchos países aumentaran de forma considerable sus producciones y rendimientos agrarios, pero no es menos cierto que su difusión, sobre todo en los países subdesarrollados, ha tenido consecuencias nefastas no sólo sobre los ecosistemas como consecuencia de las duras tecnologías empleadas y la generalización del monocultivo, sino también sobre las comunidades rurales más pobres y la agricultura campesina, pues contribuyó a una mayor concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, al predominio de la agroindustria y al desarraigo de los pequeños y medianos productores.

De ahí que muchos agentes sociales sean muy reacios a la difusión de los cultivos transgénicos, y menos bajo la excusa de acabar con el hambre y resolver el dilema comentado arriba entre las necesidades de una población en franco crecimiento y la exigencia de preservar la biodiversidad y el ambiente. En cualquier caso, cabe preguntarse qué sostenibilidad puede existir en la agricultura cuando las grandes empresas biotecnológicas pugnan por extender sus productos en busca de beneficios económicos inmediatos y sin pensar en lo que heredarán y cómo se sustentarán las generaciones venideras. Por lo tanto, existe una contradicción flagrante entre lo que publicitan varios organismos e instituciones públicas y privadas (Naciones Unidas, FAO, Fundación Rockefeller, entre otros), incluso la UE, y la cruda realidad determinada por un modo de producción cuya esencia inherente es la obtención de la máxima rentabilidad económica en el menor tiempo posible.

El desarrollo sostenible se ha convertido en un concepto polivalente que se recita como una especie de *mantra* por parte de todo tipo de agentes económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, incluso por aquellos que más contribuyen con sus acciones, estrategias o políticas al deterioro ambiental y a la destrucción de los ecosistemas en todo el mundo. Hasta la OMC intenta convencer a la opinión pública de sus excelencias, insistiendo en que no es una organización antiambiental porque en su normativa existen varias referencias al ambiente y al necesario desarrollo sostenible. En el preámbulo del Acuerdo de Marrakech (1994) se dice que la OMC tiene como fin acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios, permitiendo al mismo tiempo la utilización óptima de los recursos naturales mundiales en conformidad con el objetivo de conseguir un desarrollo sostenible.

Desde luego, es cierto que la OMC pretende aumentar la producción y el comercio internacional de mercancías y servicios libre de trabas aduaneras, pues ésta es su razón de ser, un instrumento legal al servicio del capital, pero no es verdad que entre sus pretensiones figure el desarrollo sostenible con la óptima utilización de los recursos,

falacia que R. Peet (2004) se ha encargado de desmontar punto por punto en su excelente y crítica obra.

La liberalización mercantil a escala planetaria, auspiciada por la OMC, constituye un acicate que las grandes empresas transnacionales de los países ricos y las oligarquías de los países pobres tienen para producir más y con menores costes y, por lo tanto, incrementar las exportaciones. El aumento de la producción y el comercio y la búsqueda de mano de obra y materias primas baratas con el fin de reducir los costes productivos está representando un renovado ciclo de sobreexplotación de los recursos naturales y mayores agresiones ambientales para los ya muy castigados ecosistemas de los países subdesarrollados. Además, el comercio capitalista se caracteriza por “externalizar” los costes ecológicos de sus actividades al conjunto de la sociedad en lugar de reflejarlos en los precios que los consumidores pagan por los bienes y servicios que adquieren.

De hecho, las corporaciones transnacionales y las empresas locales, fundamentalmente las de tipo agropecuario y agroindustrial, no consideran la protección del ambiente y de los recursos naturales como factores fundamentales para un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno, sino como una traba para el comercio, similar a una barrera no arancelaria que merma la competitividad de muchos productos o mercados importantes y perjudica a los intercambios mercantiles. De ahí el escaso éxito de las propuestas que abogan por la introducción de cláusulas ecológicas en los acuerdos comerciales internacionales, excepto cuando las mismas sirven como barreras no arancelarias de los países ricos frente a las importaciones desde los países pobres o se utilizan como instrumento de las potencias para seguir controlando la economía del mundo subdesarrollado bajo la cínica bandera de la ecología o el desarrollo sostenible, que en realidad es lo que menos les importa.

J. M. Naredo (2004) escribe que una manera muy sencilla de que los beneficios empresariales crezcan estriba en cargar los costes y deterioros sobre esa tierra de nadie que es el medio, que queda fuera del registro contable, o trasladarlos a lugares lejanos, normalmente subdesarrollados. La lucha por mejorar la rentabilidad ha constituido siempre una potente y despiadada máquina de generar daños ambientales y sociales.

Una prueba fehaciente de la falacia que representa el desarrollo sostenible se aglutina en torno a los tres problemas fundamentales que, entre otros, genera el capitalismo: el agotamiento y extinción de los recursos naturales (tierras fértiles, agua, fuentes de energía, bosques y selvas, biodiversidad animal y vegetal), el precario equilibrio del sistema Tierra (armamento nuclear, combustibles fósiles, cambio climático, efecto invernadero) y la injusticia social en el mundo (desigualdad, inequidad, divergencia, desequilibrio).

Como señala L. Boff (2006), este cataclismo social y ambiental no es inocente ni natural, pues aparece como el resultado directo de un tipo de desarrollo que no mide las consecuencias de sus actos sobre la naturaleza y sobre las relaciones sociales. Por eso, el denominado desarrollo sostenible constituye una trampa del sistema capitalista, pues alberga una contradicción manifiesta en su mismo nombre. Buena prueba de ello es que el término *desarrollo* está tomado de la economía de mercado, mientras que la noción *sostenibilidad* procede de las ciencias ecológicas y biológicas. El desarrollo capitalista, aunque sería más apropiado decir crecimiento, es desigual y desequilibrado, puesto que

acumula para una parte mínima de la población mundial a costa de la mayoría de sus habitantes, que se ven perjudicados y excluidos. Este crecimiento pretende ser lineal y siempre en aumento. Por su parte, la sostenibilidad se encuentra relacionada con la capacidad que un ecosistema tiene de incluir a todos, de mantener un equilibrio dinámico que permita la subsistencia de la mayor biodiversidad posible, sin explotar, oprimir o excluir.

Como puede comprobarse, según L. Boff (2006), desarrollo capitalista y sostenibilidad se niegan mutuamente, ya que no combinan los intereses de los seres humanos con los de la conservación ecológica. Más bien sucede al contrario porque se niegan y destruyen. Lo que se necesita es una sociedad sostenible que se otorgue a sí misma un desarrollo que satisfaga las necesidades de todos y del ambiente, así como que el planeta sea sostenible y pueda mantener su equilibrio dinámico, rehacer sus pérdidas y mantenerse abierto a ulteriores formas de desarrollo.

Asimismo, J. Martínez Alier (1992) indica que el Informe Brundtland ve en la pobreza una causa del deterioro ambiental y, por eso, predica la conveniencia de luchar para conseguir un desarrollo económico que sea sustentable desde el punto de vista ecológico y que de forma simultánea elimine la pobreza y mejore el ambiente. Este autor acepta que la pobreza pueda ser causa de degradación del medio, pero rechaza la creencia de que la pobreza pueda ser eliminada mediante un crecimiento económico general, en lugar de por la redistribución de la riqueza. Esta fe en las bondades del crecimiento económico ascendente y constante resulta contraproducente para la integridad ecológica.

Resulta curioso, por otro lado, que todo el mundo, desde los individuos comunes hasta los gobiernos y los representantes de los organismos internacionales (incluso los de carácter económico y financiero), está de acuerdo en que hay que erradicar la pobreza de la tierra por injusta e indigna. Sin embargo, este discurso y estas buenas intenciones no van en paralelo con los necesarios razonamientos y deliberaciones sobre la riqueza, cuando ambas situaciones están dialécticamente interrelacionadas. Se pretende acabar con la pobreza mediante una política de mínimos (salario mínimo, renta mínima, consumo mínimo de calorías, acceso mínimo a los recursos) con la intención de que la mayoría de la población mundial ascienda por encima de la línea de determinado umbral de consumos. La pretensión de extender la riqueza implica la idea errónea de vivir en un planeta infinito, con recursos también infinitos, con una tecnología que todo lo puede y pletórico de buena voluntad, donde las personas conseguirían elevadas cotas en todo tipo de consumos.

Esta pretensión de enriquecimiento generalizado, con el fin de que la economía de mercado siga funcionando a pleno rendimiento, no es admisible en un mundo prácticamente saturado, donde su capacidad de carga se ha superado con creces hace tiempo, no está asegurada la soberanía alimentaria de la mayoría de su población, escasean los recursos básicos como el agua y el aire no contaminado y se encuentra en entredicho la supervivencia de las generaciones venideras, como sostiene M. Pascual (2006). Ante esta realidad incuestionable, resulta palmario que no se podrá erradicar nunca la pobreza si antes no se limita el desaforado consumo de los países ricos, el expolio que éstos ejercen sobre los recursos de los pobres y la destrucción sistemática de sus ecosistemas. ¿Pero cómo se limitan estas cuestiones bajo un modo de producción

que no tiene y no puede tener límites, que ve con horror cualquier tipo de regulación, sobre todo del consumo, y que sacraliza la omnipresencia del mercado competitivo?

BIBLIOGRAFÍA

ATANCE, I. y TIÓ, C. (2000): “La multifuncionalidad de la agricultura: aspectos económicos e implicaciones sobre la política agraria”. *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, nº 189, pp. 29-48.

BOFF, L. (2006): “La contradicción capitalismo/ecología”. *Ecoportal.net.El directorio ecológico y natural* (www.ecoportal.net), 28 de julio.

FERRO RODRÍGUEZ, A. *et al* (2000): *Alimentos transgénicos. La nueva revolución verde*. Madrid: McGraw-Hill.

GARCÍA DELGADO, J. L. y GARCÍA GRANDE, M. J. (dirs.) (2005): *Política agraria común: balance y perspectivas*. Colección Estudios Económicos, nº 34. Barcelona: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa).

IZAM, M. y ONFFROY DE VÉREZ, V. (2000): *El sector agrícola en la integración económica regional: experiencias comparadas de América Latina y la Unión Europea*. Serie Comercio Internacional, nº 8. Santiago de Chile: CEPAL.

MARTÍNEZ ALIER, J. (1992): *Ecología y pobreza*. Valencia: Caixa d’Estalvis de València, Castelló i Alacant.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2003): *El Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Sostenible*. Madrid: MAPA.

MONTAGUT, X. y DOGLIOTTI, F. (2006): *Alimentos globalizados. Soberanía alimentaria y comercio justo*. Barcelona: Icaria.

MONTAGUT, X. y VIVAS, E. (coords.) *et al* (2007): *Supermercados, no gracias*. Barcelona: Icaria.

NACIONES UNIDAS (1987): *Nuestro futuro común*. Nueva York: Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

NAREDO, J. M. (2004): “Crecimiento insostenible, desarrollo sostenible”. En ROMERO, J. *Geografía Humana*. Barcelona: Ariel, pp. 395-447.

PASCUAL RODRÍGUEZ, M. (2006): “Ecología: Deconstruyendo los mitos del capitalismo”. *Ecoportal.net.El directorio ecológico y natural* (www.ecoportal.net), 16 de octubre.

PEET, R. (2004): *La maldita trinidad. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio*. Pamplona: Laetoli.

- RIFKIN, J. (1999): *El siglo de la biotecnología*. Barcelona: Crítica/Marcombo.
- SEGRELLES SERRANO, J. A. (1991): “La producción ganadera intensiva y el deterioro del medio ambiente”. *Mundo Ganadero*, vol. 10, pp. 33-39.
- SEGRELLES SERRANO, J. A. (1993): *La ganadería avícola y porcina en España. Del aprovechamiento tradicional al industrializado*. Alicante: Universidad de Alicante.
- SEGRELLES SERRANO, J. A. (1995): “Ganadería y ambiente en los Países Bajos”. *Mundo Ganadero*, vol. 1, pp. 42-47.
- SEGRELLES SERRANO, J. A. (2001): “Problemas ambientales, agricultura y globalización en América Latina”. *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales* (<http://www.ub.es/geocrit/sn-92.htm>), vol. 5, nº 92, 32 pp.
- SEGRELLES SERRANO, J. A. (2004): *Agricultura y territorio en el MERCOSUR*. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante.
- SEGRELLES SERRANO, J. A. (2005): “El problema de los cultivos transgénicos en América Latina: una ‘nueva’ revolución verde”. *Entorno Geográfico*, nº 3, pp. 93-120.
- SEGRELLES SERRANO, J. A. (2007): “La calidad agroalimentaria de la Unión Europea: un instrumento proteccionista contra la competencia comercial de la agricultura latinoamericana”. *XI Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL)*, Bogotá, marzo.
- VORLEY, B. (2003): *Food Inc. Corporate Concentration from Farm to Consumer*. London: UK Food Group.
- XARXA CONSUM SOLIDARI (2007): “Grandes cadenas de distribución, no gracias”. *Ecoportal.net. El directorio ecológico y natural* (www.ecoportal.net), 9 de agosto.